



*Al servicio de la paz y la justicia*

## **SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL**

Medellín, marzo catorce (14) de dos mil veinticuatro (2024)

**Benjamín de J. Yepes Puerta**

Magistrado Ponente

**Proceso:** Responsabilidad Civil Extracontractual

**Radicado:** 05266-31-03-001-2010-00506-01

**Demandantes:** Edwin Andrés Molina Holguín

**Demandados:** Omar Antonio García Salinas, Transportes Envigado y otra.

**Asunto:** Ejercicio de actividad peligrosa hace presumir la responsabilidad en cabeza de quien la ejerce. Existiendo en ambas partes roles riesgosos, se presenta una concurrencia de causas o participación concausal, por tanto, debe determinarse la incidencia del comportamiento de cada uno de los conductores en la producción del resultado.

**Instancia:** Segunda

**Decisión:** Confirma y modifica.

**Rdo. Interno:** 003-18

**Providencia:** SP. Número 010 -24

Procede la Sala a emitir sentencia mediante la cual se resuelve el recurso de apelación interpuesto y sustentado en contra de la sentencia proferida el día 31 de octubre de 2017 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado, de una parte, por el demandante EDWIN ANDRÉS MOLINA HOLGUÍN, y de la otra, por la codemandada y llamada en garantía AXA Colpatria Seguros S.A., dentro del presente proceso Declarativo – Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual-, promovido por el

precitado actor contra el reseñado demandado, así como contra OMAR ANTONIO GARCÍA SALINAS y Transportes Envigado, proceso en el cual se llamó en garantía a la Compañía de Seguros COLPATRIA S.A.

## **I. SÍNTESIS DEL CASO.**

### **1. Fundamentos fácticos<sup>1</sup>.**

**1.1.** El 23 de enero de 2009 en la diagonal 79 con calle 76 (Avenida 80) de este Distrito, el señor Omar Antonio García Salinas conduciendo el vehículo tipo taxi de placas TME023, le produjo lesiones al señor Edwin Andrés Molina Holguín, conductor de la motocicleta de placas DCU46A.

**1.2.** El 29 de diciembre de 2009, por intermedio de la Resolución número 1334, la Secretaria de Tránsito y Transporte del Municipio de Medellín, emitió fallo contravencional que declaró responsable al señor Omar Antonio García Salinas, por infringir los artículos 55, 61 y 118 inciso 1º y 131 literal d, Inciso 4º del Código nacional de Tránsito.

**1.3.** El vehículo de placas TME023 se encuentra afiliado a la empresa Transportes Envigado y está asegurado con la Compañía de Seguros Colpatria. Como consecuencia del accidente, Edwin Andrés Molina Holguín sufrió, según dictamen del médico legista: "Trauma craneoencefálico, hemorragia cerebral postraumática, contusión frontal y parietal, fractura craneal parietotemporal, politrauma, vasoespasmo cerebral, cicatriz de forma irregular, de distribución transversal, sobreelevada, hipercrómica, la cual mide 3 x 1 cms y se ubica en la región central del cuello. INCAPACIDAD DEFINITIVA: Cincuenta (50) días. SECUELAS: 1) Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente dictaminada por la notoriedad de la cicatriz a nivel del cuello, dicha asimetría fue consecuencia del trauma a este nivel, por traqueostomía durante el período crítico de su estancia hospitalaria debido a la incapacidad que tenía el evaluado para respirar por sus propios medios. 2) Perturbación funcional del miembro del sistema

---

<sup>1</sup> Cuaderno Primera Instancia, Fl.87, actuación N° "003Demanda.pdf"

nervioso central (cerebro) de carácter permanente, secundaria a trauma craneoencefálico severo, el carácter de esta secuela es dictaminado por que las lesiones a nivel cerebral generan daños a nivel neuronal las cuales son irreversibles..."

**1.4.** El 15 de junio de 2010 el demandante fue calificado por la Junta Regional de Calificación de Invalidez, la cual dictaminó una pérdida de capacidad laboral del 23.85%.

**1.5.** Como consecuencia del accidente, el señor Edwin Andrés Molina Holguín, sufrió los siguientes perjuicios materiales:

**1.5.1.** En la modalidad de daño emergente, por las averías a prendas de vestir, pérdida del casco, transporte, copago del Hospital General de Medellín, pagos por consulta psiquiátrica en la Congregación Mariana, centro de salud mental de Envigado, Clínica Las Américas, cinco (5) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del fallo.

**1.5.2.** Por lucro cesante, la suma de doscientos noventa (290) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del fallo, teniendo en cuenta que como Técnico en Sistemas en la Comercializadora LECRIMA, devengaba un salario de \$1.250.000, así mismo, tenía un café internet con múltiples servicios del cual percibía \$1.000.000 mensuales; además, desde el momento del accidente y la pérdida de capacidad laboral del 23.85%, no puede volver a desempeñar las labores descritas.

**1.5.3.** Respecto del daño a la vida de relación, adujo que se estimaba en cuantía de setenta (70) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del fallo, el cual se fundamenta en la imposibilidad que tendrá en el futuro para la realización de actividades lúdicas y placenteras, como el deporte el cual

constituía parte de su vida cotidiana; además las relaciones interpersonales se verían afectadas.

**1.5.4.** En relación con el daño moral, esto es, la desestabilidad emocional que sufrió como consecuencia del accidente, el dolor que sufrió de estar hospitalizado en la Clínica Las Américas por un mes y 8 días en cuidados intensivos, lo cuantificó en cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del fallo.

**1.6.** Advirtió que citó a los demandados a audiencia de conciliación, sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo.

## **2. Síntesis de las pretensiones.**

**2.1.** Una vez subsanada la demanda, peticionó que se declare que OMAR ANTONIO GARCÍA SALINAS, conductor y propietario del vehículo de placas TME023 y TRANSPORTES ENVIGADO, empresa donde se encuentra afiliado el citado automotor, son civilmente responsables en forma solidaria de los perjuicios causados al señor Edwin Andrés Molina Holguín con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 23 de enero de 2009, y en acción directa a AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., en calidad de aseguradora.

**2.2.** Que como consecuencia de lo anterior, sean condenados al pago de los perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente por cinco (5) salario mínimos legales mensuales vigentes y como lucro cesante por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA (290) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, para el momento del fallo; como perjuicios extrapatrimoniales, SETENTA (70) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES PARA EL MOMENTO DEL FALLO, correspondiente a daño a la vida de relación y por perjuicios morales CINCUENTA (50) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES PARA LA FECHA DEL FALLO.

## **3. Contestación de la demanda.**

### **3.1. OMAR ANTONIO GARCÍA SALINAS<sup>2</sup> y TRANSPORTES ENVIGADO S.A.<sup>3</sup>**

El señor OMAR ANTONIO GARCÍA SALINAS y la empresa TRANSPORTES ENVIGADO S.A., en un mismo escrito y a través del mismo apoderado judicial, ejercieron contradicción señalando que si bien se presentó la colisión aludida por el demandante, no fue por imprudencia del señor García Salinas, ya que de acuerdo con la historia clínica del actor y el informe del agente de tránsito del procedimiento, el joven Edwin Andrés Molina Holguín se encontraba beodo (embriagado). Y aunque el señor García Salinas fue declarado como contraventor en el organismo de tránsito, allí no se tuvieron en cuenta las versiones iniciales de los conductores, especialmente de la motocicleta, cuando afirmó que se desplazaba a 30 K/H, por el carril derecho, pues ello no concuerda con el resultado final obtenido y con los daños de ambos vehículos.

Se opusieron a las pretensiones, toda vez que la responsabilidad frente al accidente radica única y exclusivamente en el señor Edwin Andrés Molina Holguín, quien con su actuar imprudente fue la causa determinante para su ocurrencia.

Propusieron las excepciones que denominaron:

**CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA.** En atención a que el actuar de Edwin Andrés Molina Holguín no se ajustó al deber objetivo de cuidado que le era exigido, a la diligencia y cuidado que debía conservar, adicionalmente con violación de reglamento, lo que no fue observado por el Inspector de Tránsito al momento de decidir el trámite contravencional.

**COMPENSACIÓN DE CULPAS.** Por cuanto se debía analizar el grado de participación que tuvieron los conductores al momento de la colisión y este debe tener incidencia al momento de analizar el monto a indemnizar, ya

---

<sup>2</sup> Cuaderno Primera Instancia, actuación N° "010ContestaciónDe Demanda.pdf" Paginas 1 a 6

<sup>3</sup> Cuaderno Primera Instancia, actuación N° "010ContestaciónDe Demanda.pdf" Paginas 1 a 6

que se debe tener en cuenta el grado de participación de ambos conductores en el resultado final obtenido.

MALA FE. Pues el demandante pretende el reconocimiento de una indemnización sacando beneficio de su propia culpa. En su sentir, no podrían ser condenados al pago de suma dineraria alguna, en beneficio de quien con su actuar puso en riesgo su vida y la de su parrillero. Que ello puede verificarse en la anotación que aparece en el informe del guarda de tránsito y en la historia clínica cuando recibió la atención médica, que indica la embriaguez en que se encontraba para ese momento.

Con base en los mismos fundamentos formuló igualmente las excepciones de COBRO DE LO NO DEBIDO y NO EXIGIBILIDAD DE LA OBLIGACIÓN.

### **3.2. SEGUROS AXA COLPATRIA<sup>4</sup>.**

Expuso que el accidente se presentó cuando el conductor del vehículo de placas TME023 se desplazaba por la carrera 76 y terminando de atravesar la diagonal 79, la motocicleta en que se desplazaba el demandante, a exceso de velocidad, colisionó con el mencionado automotor. Advirtió que el proceso contravencional es de naturaleza administrativa, por tanto, no se tiene en cuenta la responsabilidad civil de las partes involucradas en el accidente.

Propuso como excepciones:

FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA. La demanda se dirige en contra del asegurador de la responsabilidad civil y en la pretensión primera se solicita que se declara civilmente responsable, y para que pueda imputarse esta es necesario que pueda atribuírsele algunas de las formas de responsabilidad civil extracontractual establecidas en el C. Civil.

---

<sup>4</sup> Cuaderno Primera Instancia, actuación N° "010ContestaciónDe Demanda.pdf" Paginas 22 a 34.

NEUTRALIZACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA POR ACTIVIDAD PELIGROSA. En el presente asunto se está frente a dos personas que estaban ejerciendo actividad peligrosa, por tanto, la presunción de culpa se anula y bajo estas condiciones, debe probarse por quien alega la responsabilidad.

CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA. El nexo causal desaparece por la culpa exclusiva de la víctima, ya que el demandante ejecutaba una actividad peligrosa como lo es la conducción de una motocicleta, sin cumplir los reglamentos de tránsito, toda vez que transitaba a exceso de velocidad en proximidades a una intersección, cuando el Código Nacional de Tránsito prescribe que la velocidad debía reducirse a 30 kilómetros por hora, y por el estado de embriaguez en el cual se encontraba al momento del accidente, que implicaba la disminución de sus capacidades mentales y de reacción, por lo que no se percató de la presencia del taxi, y por la gran velocidad a la que se desplazaba.

REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN. En caso de que el actor cumpla con la carga procesal de acreditar la culpa de los demandados, debe considerarse que la víctima se expuso al daño en forma imprudente, ya que ejecutó la actividad de conducir una motocicleta sin la precaución y cuidado necesario.

Del mismo modo propuso las de INEXISTENCIA DEL PERJUICIO, TASACIÓN EXCESIVA DEL PERJUICIO, NO COBERTURA DEL DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN, SUBLÍMITE DE AMPARO DE PERJUICIO MORAL, NO COBERTURA DE LUCRO CESANTE, LÍMITE ASEGURADO, DEDUCIBLE; y por último objetó el JURAMENTO ESTIMATORIO.

#### **4. Llamamiento en Garantía.**

Los demandados OMAR ANTONIO GARCÍA SALINAS y la empresa TRANSPORTES ENVIGADO S.A. formularon llamamiento en garantía a AXA SEGUROS COLPATRIA S.A.<sup>5</sup> en virtud del contrato de seguro celebrado con dicha empresa, con el cual se obligó a indemnizar los perjuicios

---

<sup>5</sup> Cuaderno 002, actuación N° "002Memorial.pdf"

patrimoniales que sufrieren los asegurados por responsabilidad civil extracontractual en que incurran, ocasionados entre otros, por el vehículo de placas TME023 descrito en la respectiva póliza número 8001053669, contrato que se encontraba vigente para el 23 de enero de 2009 fecha del accidente de tránsito.

Al respecto, SEGUROS COLPATRIA S.A., por conducto de apoderado judicial manifestó<sup>6</sup>, que era cierto la existencia del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual, suscrito con Transportes Envigado el 22 de mayo de 2008. No obstante, se opuso a las pretensiones del llamamiento en garantía, toda vez que la obligación del asegurador no es la desembolsar todas las sumas que el asegurado deba pagar al demandante en virtud de la condena.

Refirió respecto del perjuicio de daño a la vida de relación, que en la póliza enunciada se estableció que estaba excluido de cobertura, tal y como quedó descrito en la condición 1.4. del contrato de seguro.

En esa medida invocó las excepciones de mérito de "NO COBERTURA DE DAÑOS A LA VIDA DE RELACIÓN", "EXCLUSIONES", "SUBLÍMITE DE AMPARO DE PERJUICIO MORAL", "NO COBERTURA DE LUCRO CESANTE", "LÍMITE ASEGURADO", "DEDUCIBLE" y "OBJECCIÓN A JURAMENTO ESTIMATORIO".

## **5. Sentencia de primera instancia<sup>7</sup>.**

El Juez A-quo sostuvo que en el presente asunto se encontraba acreditado el hecho, esto es, que el vehículo tipo taxi de placas TME023, el cual era conducido por su propietario, señor Omar Antonio García Salinas, afiliado a la empresa TRANSPORTES ENVIGADO S.A., el día 23 de enero de 2009, cuando se desplazaba por la carrera 76 de la ciudad de Medellín, al llegar al cruce de la carrera 76 con la diagonal 79, fue impactado por el costado izquierdo por la motocicleta de placas DCU46A, conducida por Edwin Andrés Molina Holguín. Del mismo modo, que el daño se evidenciaba

<sup>6</sup> Cuaderno 002, actuación N° "004Memorial.pdf"

<sup>7</sup> Cuaderno 001 Principal, actuación N° 050"



con lo advertido en el dictamen expedido por Medicina legal de Medellín y el de pérdida de capacidad laboral rendido por la Junta de Calificación de Invalidez para Antioquia, éste último que determinó una PCL del 23.85%, de origen común y con fecha de estructuración el 27 de enero de 2010. En cuanto al nexo causal, afirmó que el factor de responsabilidad en este caso es el riesgo que se origina del ejercicio de una actividad peligrosa, potencial e inminente de causar un daño e intereses tutelados por el ordenamiento.

No obstante, ante la concurrencia de actividades peligrosas en este asunto, señaló que radicaba en la parte accionada la carga de probar el rompimiento del nexo causal por la existencia de una causa extraña, que implicaría demostrar si efectivamente se configura alguna de las excepciones que interpuso en la contestación de la demanda.

Concluyó que, como la motocicleta se desplazaba a alta velocidad y a la víctima se le cayó el casco al momento del choque, que indica que lo llevaba mal puesto, este contribuyó significativamente para que el impacto entre los vehículos se produjera. Por tanto, dispuso que se mitigara la condena en un 50%, en cuanto a su deber de repararlo.

Como consecuencia de lo anterior, declaró civil y extracontractualmente responsables, en forma solidaria, al señor Omar Antonio García Salinas y Transportes Envigado S.A., de los perjuicios causados al señor Edwin Andrés Molina Holguín, con ocasión al accidente de tránsito ocurrido el 23 de enero de 2009 en la diagonal 76 de este Distrito. Declaró probada la excepción de compensación de culpas, parcialmente las excepciones de inexistencia y tasación excesiva de perjuicio, condenándolas al pago de \$45.500 por daño emergente, \$10.449.113,27, por lucro cesante consolidado, \$14.508.046,93 por lucro cesante futuro, \$14.754.340, que equivalen a 20 SMLMV, por concepto de daño moral y \$14.754.340 correspondiente al daño fisiológico o a la vida de relación.

Con fundamento en el contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual, plasmado en la póliza 8001053669, expedida el 22 de mayo de 2008, ordenó a Seguros Colpatria S.A. a pagar el 70.51% del valor

de los perjuicios que le fueron reconocidos al demandante, ya que el otro 29,49% lo asumirían solidariamente los demandados Omar Antonio García Salinas y Transportes Envigado S.A.

## **6. Impugnación.**

**6.1.** El demandante EDWIN ANDRÉS MOLINA HOLGUÍN<sup>8</sup> interpuso recurso de apelación contra la sentencia antes referida, en cuanto a la tasación de los perjuicios materiales e inmateriales, después de advertir que en el proceso existe prueba que demuestra la responsabilidad del demandado en los hechos materia de la demanda, pues el actor y su acompañante se desplazaban por el sitio donde ocurrió el accidente y fueron chocados por el vehículo taxi que se pasó el semáforo en rojo.

Argumentó que el lucro cesante peticionado se soportó en las pruebas aportadas, como lo fue el dictamen pericial que da cuenta de la pérdida de capacidad laboral del demandante, el cual fue determinado en un 23.85%, experticia que tiene pleno valor porque no fue controvertido por las partes, al igual que los testigos allegados al proceso, quien al unísono respondieron sobre los ingresos del actor.

Con relación al perjuicio moral, advirtió que debe tenerse en cuenta la lesión sufrida, que se tuvieron que practicar varias cirugías, que se trata de un joven de 22 años que quedó con muchas limitaciones. Lo mismo sucede respecto del daño a la vida relación, debido a que el accionante ya no puede hacer las mismas actividades, trabajos y actividades lúdicas que realizaba antes del accidente. Dijo que debe apreciarse que quedó con limitaciones como ser humano, como profesional, pues los testigos fueron claros en indicar que él ya no juega, no ríe, ni disfruta igual, por lo que sus limitaciones son bastante considerables.

**6.2.** Por su parte Seguros Colpatria S.A., hoy AXA COLPATRIA SEGUROS S.A.<sup>9</sup> interpuso igualmente recurso de apelación, bajo el argumento que en

---

<sup>8</sup> Cuaderno 001 Principal, actuación N° "051"

<sup>9</sup> Cuaderno 001 Principal, actuación N° "051pdf, folio 5"

este caso se configura una culpa exclusiva de la víctima, ya que no se tiene en cuenta la investigación penal y los testimonios allí practicados, los cuales dan cuenta del estado de alicoramiento en que conducía el demandante, además de la violación de otras normas de tránsito.

Dijo que se le ordena el pago del 70.51% de la condena impuesta a los demandados, esto es, la suma de \$38.435.945, con lo que se desconoce el límite asegurado de la póliza que es de \$27.690.000, por lo que se debe reducir por efecto del deducible. Advirtió que el juzgado de primera instancia no aplicó el deducible pactado en la póliza.

Del mismo modo, aduce que el juzgado desconoce que la ley exige que la cobertura de lucro cesante esté pactada de manera expresa, y que en este asunto no pactaron dicha cobertura. Así mismo, que fue condenada al pago de \$14.754.340 por concepto de perjuicio moral, desconociendo que dicho rubro tiene pactado un sublímite de cobertura de \$11.076.000.

#### IV. PROBLEMAS JURÍDICOS.

Realizado el control de legalidad establecido en el artículo 132 del Código General del Proceso, no se advirtió vicio ni irregularidad alguna que configuren nulidad. Igualmente, se aprecian reunidos los presupuestos procesales requeridos para proferir una decisión de fondo.

Corresponde entonces a esta Sala, en virtud a que tanto la parte demandante como uno de los demandados apelaron, determinar si, tal y como lo sostiene la demandada y llamada en garantía AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., **i)** en el accidente de tránsito objeto del presente proceso, se configura una culpa exclusiva de la víctima, de acuerdo con las pruebas practicadas al interior del proceso penal, que denotan el estado de alicoramiento en que conducía el actor, entre otras violaciones a normas de tránsito, **ii)** si se desconoció el límite asegurado y se aplicó el deducible pactado en la póliza de seguro, **iii)** Si el lucro cesante debe estar pactado expresamente, **iv)** Si se sobrepasó la cobertura o el límite del perjuicio moral.

Dilucidado lo anterior, la Sala deberá ocuparse si es procedente incrementar la condena por lucro cesante, de acuerdo a lo probado dentro del proceso, al igual que el perjuicio moral y el daño a la vida relación.

## **V. PLANTEAMIENTOS SUSTENTATORIOS DE LA DECISIÓN**

1. Como no hay discusión respecto de los presupuestos procesales, ni se advierte vicio alguno que invalide lo actuado, es procedente entrar a decidir de fondo lo que concierne a esta instancia.

2. De otro lado, claro es que la competencia de este Tribunal se circunscribe a examinar únicamente las concretas inconformidades señaladas por los apelantes, con todo y que la parte actora y la empresa aseguradora hayan recurrido la decisión, pues tal como lo ha establecido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, dado que *“...Es en el Código General del Proceso donde se implementó el «recurso de apelación» en el campo civil, mismo que refiriéndose a sentencias contempla para el reclamante tres pasos distintos: la interposición, la exposición del reparo concreto y la alegación final. En ese orden de ideas, el inconforme durante el término de ejecutoria deberá discutir los elementos de la providencia que le generen malestar y expresar de forma breve los mismos, toda vez que el enjuiciador de segundo grado solamente basará su examen en las objeciones concretas que el suplicante haya formulado tal y como lo describe el inciso 1º del artículo 320 ibídem, siendo competente únicamente para pronunciarse de lo expuesto por ese sujeto procesal tal y como reza el inciso 1º del canon 328 siguiente. Seguidamente tiene operancia la etapa ante el superior, no menos importante y destinada al desarrollo y sustento de lo ya anunciado en precedencia (...).”*<sup>10</sup> (Subrayas del Despacho).

Como consecuencia de lo anterior, teniendo en cuenta que en esta instancia el apoderado de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. está aludiendo a una ausencia de cobertura del perjuicio de daño a la vida de relación, sin

<sup>10</sup> (STC11429-2017). (STC2423-2018 y STC3969-2018), reiterada en sentencia STC4673-2018.

que ello hubiera sido objeto de reparo en primera instancia, la Sala se abstendrá de examinar este tópico<sup>11</sup>.

## **2.1. De la responsabilidad civil extracontractual en el ejercicio de actividades peligrosas, sus elementos axiológicos y la exoneración de responsabilidad.**

Teniendo en cuenta que el hecho generador de la acción en el presente asunto se trata de un accidente de tránsito, es incuestionable que los daños cuya indemnización reclama la demandante resultan del ejercicio de una actividad de las que la doctrina y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia han distinguido como peligrosas, dentro de las que se encuentra la conducción de vehículos automotores.

Por lo tanto, cuando el daño sobreviene como consecuencia de una actividad de este tipo, ha de aplicarse la preceptiva del artículo 2356 del Código Civil, evento en el cual se exceptúa a la víctima y/o perjudicado de aportar la prueba de la culpa de la parte a quien se demanda que repare el perjuicio ocasionado, toda vez que ella se presume, compitiéndole solo la acreditación del hecho, el daño y el nexo causal. Y por ello, el demandado solo se exonera probando que no fue el ejercicio de tal actividad la causa del hecho dañoso, sino un elemento extraño como el caso fortuito o fuerza mayor, acto de un tercero o culpa exclusiva de la víctima.<sup>12</sup>

Igualmente tiene sentado la jurisprudencia, que cuando el daño deviene de una actividad peligrosa como la conducción de vehículos, no sólo es responsable el conductor sino también la persona que tiene la administración del mismo, por cuanto en desarrollo de una de esas actividades es igualmente responsable, cual sucede con las empresas de transporte a las que se encuentre afiliado el automotor. Sobre el particular, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia desde vieja data

---

<sup>11</sup> Artículo 328 C.G.P.

<sup>12</sup> SC 665 de 2019 entre muchas otras

ha reiterado que, “la presunción de guardianía de la actividad peligrosa que recae en las empresas de transporte, a las que se vinculan los vehículos con los que se presta el servicio público de que ellas se encargan, tiene lugar por el sólo hecho de la afiliación y comprende a “todas aquellas personas naturales o jurídicas de quienes se pueda predicar potestad, uso, mando, control o aprovechamiento efectivo del instrumento mediante el cual se realizan aquéllas actividades”. CSJ, SC del 26 de noviembre de 1999, Rad. n.º 5220<sup>13</sup>. (Subrayas por el Despacho).

En tal sentido, dicha Corporación ha indicado que “Ese nexo, de raigambre jurídico, no material, deriva de la posibilidad en que ellas se encuentran, de dirigir la actividad concerniente con la movilización de pasajeros o cosas y de obtener provecho económico de tal gestión, razón por la cual (...) ha reiterado que esa condición “[n]o requiere (...) que se tenga físicamente la cosa (...) pues lo fundamental es que se posea el poder de mando en relación con la cosa, lo que supone un poder intelectual de control y dirección de la misma”<sup>14</sup>. A partir de lo anterior, agrega que “surge claro que, para desvirtuar la presunción en comento, corresponde a las empresas transportadoras acreditar la ocurrencia de hechos en virtud de los cuales fuere forzoso entender que perdieron el “poder intelectual de control y dirección” de la actividad peligrosa a que atrás se hizo referencia, sin que medie culpa de su parte, más no el control físico de la cosa.”<sup>15</sup>

Pues bien, en el asunto bajo estudio, según la situación fáctica planteada y el respaldo probatorio obrante en el expediente, se evidencia que OMAR ANTONIO GARCIA SALINAS ejerciendo actividad peligrosa de conducción de un vehículo de servicio público tipo taxi de placas TME023 afiliado a la empresa TRANSPORTES ENVIGADO S.A. , al circular por la Carrera 76 con la diagonal 79 de esta ciudad, el 23 de enero de 2009, colisionó con la motocicleta de placas DCU46A, conducida por el señor Edwin Andrés Molina Holguín, quien sufrió “TRAUMA CREANEOENCEFÁLICO, HEMORRAGIA

---

<sup>13</sup> Reiterada en Sentencia SC1731 de 2021

<sup>14</sup> CSJ, SC 4750 del 31 de octubre de 2018, Rad. N° 2011-00112-01

<sup>15</sup> SC1731-2021, M.P. Álvaro Fernando García Restrepo, 19 de mayo de 2021

CEREBRAL POSTRAUMÁTICA, CONTUSIÓN FRONTAL Y PARIETAL, FRACTURA CRANEAL PERIETOTEMPORAL, POLITRAUMA, VASOESPASMO CEREBRAL”.

Elo es indicativo que tanto parte demandante como demandada estaban ejerciendo actividades peligrosas, por tanto, se hace necesario verificar la incidencia del comportamiento de cada uno de los agentes involucrados en la producción del daño.

En relación con este tema, ha sostenido la Corte: *“Ahora, existiendo roles riesgosos, no hay lugar a una responsabilidad con culpa probada o neutralización de culpas, sino de una participación concausal o concurrencia de causas. Esto, por cuanto una actividad peligrosa no deja de serlo por el simple hecho de ser protagonista con otra acción de la misma naturaleza”*<sup>16</sup>:

*“Así las cosas, la problemática de la concurrencia de actividades peligrosas se resuelve en el campo objetivo de las conductas de víctima y agente, y en la secuencia causal de las mismas en la generación del daño, siendo esa la manera de ponderar el quantum indemnizatorio”.*

*“En tal caso, entonces, corresponde determinar la incidencia del comportamiento de cada uno de los agentes involucrados en la producción del resultado, para así deducir a cuál de ellos el daño le resulta imputable desde el punto de vista fáctico y, luego, jurídico. Como se dijo en el precedente antes citado, valorar la “(...) conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del afectado, estable[cer] su relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal”.*

En esa medida, corresponde verificar la incidencia del comportamiento de cada uno de los conductores involucrados en el

---

<sup>16</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala Civil, Sentencia SC4420-2020

accidente, y de esta manera determinar fácticamente quien fue el contribuyente efectivo en la producción del resultado dañoso.

En el sub-júdice, analizadas las pruebas allegadas al proceso, se tiene el informe de accidente de tránsito<sup>17</sup>, el cual da cuenta que el lugar del golpe del taxi fue por el lado lateral, guardabarro y puerta izquierda delantera, mientras que el de la motocicleta fue frontal. De acuerdo a la ubicación o sector de la vía donde quedaron los rodantes, se observa que están en el carril izquierdo, siendo la diagonal 79 (Avenida 80) doble, de lo que se puede colegir que la moto se desplazaba por la mitad de dicha vía, entre los dos carriles.

Ello fue confirmado por el mismo demandante cuando rindió la versión ante la Inspección Tercera de Tránsito<sup>18</sup>, cuando se le preguntó que de acuerdo al croquis su trayectoria era por el carril izquierdo, y contestó: "*...en la mitad de los dos carriles iba yo...*". De lo anterior descrito y lo reconocido por el demandante, se puede evidenciar que el motociclista iba a más de un metro de distancia de la "acera u orilla", con lo que transgredió el artículo 94 del Código Nacional de Tránsito en su inciso 2º, normativa vigente para la fecha que ocurrió en accidente, en tanto actualmente fue modificada por el art. 17 Ley 1811 de 2016.

No obstante, se debe dilucidar cuál de los dos conductores posiblemente se cruzó el semáforo en rojo, señal que existía y estaba operando según el informe de tránsito.

Sobre este asunto las versiones son encontradas, toda vez que en últimas en el trámite contravencional, ambos conductores son enfáticos en afirmar que tenían el semáforo en verde. El Demandado Omar Antonio García Salinas dijo que el accidente se debió a que el demandante se cruzó el semáforo en rojo a alta velocidad y que fue este el que chocó su carro.

---

<sup>17</sup> Fls. 17 y 18, PDF.03. Demanda. Cuaderno 001Principal.

<sup>18</sup> Fls. 22, PDF.03. Demanda. Cuaderno 001Principal



Por su parte el señor, Edwin Andrés Molina Holguín, sostuvo que "...el señor se tiró semáforo en rojo...".

Frente a los hechos, el demandado indicó en el proceso contravencional que "...estaba parado en la 76 con la 80, semáforo en rojo, luego miró a ambos lados estaban los carros parados, arranqué de nuevo, ahí hay semáforo, cámara, y cuando sentí fue el batacazo, ellos no frenaron ni nada...", luego dentro del proceso penal sostiene que: "...el día 23 de enero de 2009, su hijo le entregó el carro a las 4:00 de la mañana, que a las 5:25 de la mañana lo mandó la empresa a través de radioteléfono para una carrera a Belén Rincón y como estaba en Saludcoop de la 80, el semáforo de la 65 estaba en rojo, entonces esperó que cambiara el semáforo, cuando cambió miró para todos lados y al ver que todos los carros en la avenidas 80 estaban parados, en particular en los carriles de subida en dirección norte-Sur, había un camión y un carro pequeño, dejó rodar el carro y cuando menos pensó sintió el golpetazo...".

De esas dos versiones, la primera que se emite, por la proximidad a la fecha de los hechos, donde no han mediado elementos externos que la contaminen o desdibujen, que generalmente se ofrece de manera desprevenida y espontánea, desde las reglas de la experiencia, resulta ser la más creíble en contraste a la segunda, que por las implicaciones propias de un proceso penal o de uno civil, y de las eventuales consecuencias que de allí se puedan derivar, donde ya han mediado consejos o asesorías de cara a *encuadrar* sus dichos en su beneficio, así sea que no se consulte genuinamente la realidad de las cosas.

Así, de estos dichos, puede evidenciarse ambigüedad en las versiones del taxista, pues en un principio simplemente dijo que el semáforo estaba en rojo, que había observado los carros detenidos en la intersección de la avenida 80, y había arrancado de nuevo, es decir que en verdad no esperó que el semáforo pasara de rojo a verde, sino que se confió en el hecho de supuestamente haber mirado para ambos lados y ver los carros parados decidió reanudar su marcha, cuando ya luego sintió el golpe de la motocicleta, en cambio ya en el trámite penal, además de plantear una

novedosa historia por la cual se encontraba allí, ahora sí hace hincapié que como el semáforo estaba en rojo, esperó hasta que cambiara a verde para poder arrancar de nuevo, e incluso pudo detallar, a pesar de que ya había pasado mucho más tiempo de su versión inicial, hasta el tamaño de los vehículos que supuestamente había visto parados *un camión y un carro pequeño*, y luego ya no afirma que “*arranqué de nuevo*”, sino que simplemente *dejé rodar el carro*, y ya luego cuando menos sintió el *golpetazo*. Por supuesto que son evidentes los esfuerzos por matizar a su favor las circunstancias como en verdad se dieron los hechos.

Ahora , llama la atención el hecho de que al momento de levantarse el croquis de los hechos por el agente de tránsito, a pesar de que él estuvo presente, y no el motociclista quien fue trasportado al hospital, no dejase constancia en el mismo de los supuestos testigos presenciales del hecho, que sin embargo luego relacionó para efectos de la investigación contravencional, pero ni siquiera concurrieron, y a pesar de que uno de ellos declaró a instancia del Juez penal, dada la relevancia de dicha prueba, luego ni siquiera fue solicitada en este trámite, o al menos se invocó como trasladada para estos efectos.

Entonces de lo que brota de su solo dicho, queda en evidencia que, en verdad, no esperó a que el semáforo estuviera en verde, sino que se confió en poder continuar por el hecho de haber mirado a los lados, lo que no le permitió percatarse de la motocicleta que se desplazaba por la avenida 80 en ese momento, o haber calculado que podía hacer el cruce antes que ella, con lo cual no solo inobservó una norma de tránsito, sino que obvió los deberes de prudencia y cuidado al decidir continuar su marcha con solo ese gesto.

Tesis que además se soporta en el dicho del testigo del hecho Edison Darío Bedoya Soto, quien era el acompañante en la motocicleta del demandante, quien señaló como responsable del accidente al conductor del taxi al no respetar la señal de pare del semáforo. Refirió que por la vía que transitaban se encontraba en verde, incluso así lo observó a 15 metros de distancia antes de lanzarse de la moto para evitar el impacto. Testimonio

que se advirtió responsivo, fluido y coherente, y en todo caso, a pesar de estar involucrado en los sucesos como potencial víctima en tanto pasajero de la referida moto, no se aprecia en él afán por distorsionar los hechos, o decididamente queriendo favorecer al demandante, y en todo caso, al respecto, no se presentó tacha alguna por la contraparte.

Obra dentro del expediente también resolución número 1334 del 29 de diciembre de 2009<sup>19</sup>, que apoya la anterior conclusión en tanto el Inspector Sexto Urbano Municipal de Medellín, declaró contravencionalmente responsable de la colisión, al señor Omar Antonio García Salinas, por infringir los artículos 55, 61, 118 inciso 1º y 131 Literal D, inciso 4º, del Código Nacional de Tránsito, en consecuencia, exoneró de responsabilidad contravencional al señor Edwin Andrés Molina Holguín. Decisión que no fue cuestionada o recurrida en su momento.

Y aunque se aportó al plenario la sentencia penal proferida por el Juzgado Veintiuno Penal Municipal con Función de Conocimiento de Medellín<sup>20</sup>, documento público que hace prueba de su contenido y de las declaraciones que contiene, conforme lo establece el Código General de Proceso<sup>21</sup>, donde por el contrario, se absolvió al señor Omar Antonio García Salinas del delito de lesiones personales por el cual había sido denunciado por el aquí demandante. Allí se concluyó que, como las versiones de los conductores de los vehículos eran totalmente disímiles, al igual que cada uno llevó un testigo que apoyaba su dicho, no se podía verificar la causa determinante del siniestro, es decir, que ante la existencia de serias dudas sobre la responsabilidad del señor García Salinas, esta debía ser resuelta a su favor. Sin embargo, no se puede perder de vista que cuando de una imputación penal se trata, se requiere de plena prueba dada la presunción de inocencia que constitucionalmente acompaña al sindicado, y por ello es que una decisión en el sentido de la que se analiza no tiene la virtualidad de impedir o aniquilar la acción civil, como tampoco, *contrario sensu*, puede ser suficiente para imputar responsabilidad en tal sentido, sobre todo

---

<sup>19</sup> Fls. 36, PDF.03. Demanda. Cuaderno 001Principal

<sup>20</sup> PDF.42. Traslados. Cuaderno 001Principal

<sup>21</sup> Artículo 257 C.G.P.

porque en dicho escenario no hay lugar al análisis de concurrencias de culpas o causas en la producción de la conducta imputada, simplemente se es culpable o no; acá corresponde examinar todas las pruebas allegadas para de allí poder concluir de qué manera los sujetos vinculados en el siniestro tuvieron o no participación en el mismo.

Al respecto, tiene dicho la jurisprudencia de la Corte que: *“La declaración penal de inexistencia de culpabilidad o de absolución por ausencia de prueba de dicho elemento, por su parte, no ha sido nunca objeto de cosa juzgada de lo penal en lo civil, ni en el anterior Código de Procedimiento Penal ni en el actual, lo que tiene su explicación en que ambas jurisdicciones realizan el juicio de reproche desde una perspectiva distinta<sup>22</sup>”*.

No obstante lo anterior, es indicativo para la sala el hecho de que quien ahora demanda en este escenario, también lo hubiese hecho en ese otro, pues ello denota, no solo la convicción de quien así procede en el sentido de no tener culpa o responsabilidad en los hechos, sino también en el derecho a ser reparado, en clamar justicia para su caso. Tan dispendiosa labor no la iniciaría, en la lógica de las cosas y el deber ser, quien se hubiere irrigado su propio daño, en todo o en parte.

Visto en contexto todo lo anterior, esto es, la conducta negligente del conductor del taxi al momento de realizar el cruce con el semáforo en rojo, lo que ciertamente tuvo incidencia causal en el siniestro, es verdad, como antes se anticipó, que también existen otros elementos que permiten concluir que de igual manera el conductor de la moto tuvo incidencia en el mismo, pues si este hubiese estado conduciendo por el costado izquierdo de la diagonal 79 (Av.80), a pesar de la maniobra imprudente del taxista, había podido evitar la colisión dado que, según el informe de tránsito, y la posición final de los vehículos, aquel ya había sobre pasado todo ese carril, lo cual le hubiera permitido continuar derecho, sobre todo si hubiesen

---

<sup>22</sup> Sentencia SC13925-2016

estado un metro de distancia de la “acera u orilla”, norma que como se dijo, estaba vigente para el momento de los hechos. Aunado a ello, con todo y que se desplazaban por la mitad o entre carriles como expresamente fue aceptado, de haber estado circulando a 30 kilómetros por hora que es la velocidad máxima permitida al llegar a una intersección (Art. 74 CNT), les hubiera permitido laguna maniobra o reacción de salvaguarda, y en todo caso, los daños de los rodantes, ni las lesiones infringidas hubieran sido tan considerables aquellos, y devastadoras éstas como lo fueron.

En efecto, es poco creíble, pues se aleja de toda lógica, que un automotor que se encuentre desplazando a una velocidad de 30 kilómetros por hora, no tenga la oportunidad de observar un obstáculo en la vía y pueda realizar una maniobra para evadirlo. Precisamente las evidencias que se han obtenido para circular a dicha velocidad, es que ello reduce el riesgo a sufrir lesiones graves, incluso salvar vidas.

Y claro, como se dijo en primera instancia, aunque no existe prueba idónea para determinar que el conductor de la motocicleta se encontraba en estado de alicoramiento, aspecto sobre el que ha insistido la aseguradora en su impugnación, sin embargo, el hecho de que un profesional en la medicina haya indicado en la historia clínica<sup>23</sup> que el paciente ingresa a urgencias porque sufrió de accidente de tránsito de calidad de conductor de moto “*al parecer en estado de embriaguez*”, es un indicio de esta circunstancia, a la que se suma el hecho de que se advierta que se estaba movilizando a esa hora de la mañana, esto es, 5:30 A.M., con el fin, según su dicho, de instaurar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, sin tener en cuenta el horario que esta entidad maneja, y sobre todo sobre un sector que no conduce de manera directa a donde pretendían llegar, pues vivían en el municipio de Envigado.

A lo que se suma el hecho de que en el interrogatorio de parte haya advertido el demandante<sup>24</sup> que el casco se le cayó con el impacto, toda

---

<sup>23</sup> Cuaderno 04. PDF. 002Pruebas.PAG. 91.

<sup>24</sup> Ibídem, PAG. 1

vez que ello necesariamente es indicativo que lo llevaba mal puesto, sin abrochamiento del sistema de retención que va en la quijada, ya que esto implica el incumplimiento de las disposiciones legales que regulan la materia, generando además que el daño no se hubiera atenuado o que al menos el trauma craneoencefálico no hubiera sido tan severo.

En el anterior orden de ideas, con todo y la concurrencia descrita, resulta evidente que tuvo una mayor incidencia el conductor del vehículo tipo taxi quien sin haber tomado las precauciones debidas, invadió el carril por donde se desplazaba el motociclista, por lo que la indemnización deberá reconocerse en un 70%.

## **2.2. Del límite asegurado, aplicación del deducible y cobertura o límite al perjuicio moral.**

Esclarecido lo concerniente a la responsabilidad de la parte demandada, aunque sea reducida, han de analizarse las inconformidades invocadas por la aseguradora relativas al desconocimiento del límite asegurado, la no aplicación del deducible pactado en la póliza, el no acuerdo sobre el lucro cesante y el sobrepaso del límite del perjuicio moral; para al mismo tiempo revisar la cuantía de la condena por lucro cesante, perjuicio moral y daño a la vida relación, esto último, como a instancia del demandante.

Con fundamento en el contrato de seguro allegado al plenario, la responsabilidad de la aseguradora (contra la que también se ejerció la acción directa), vista la póliza RCE 8001053669<sup>25</sup>, en ella en el ítem “MUERTE O LESIÓN A UNA PERSONA”, dice que el valor asegurado son “60 SMMLV”, con un deducible del 10%, mínimo 1 SMLMV, por lo que con ese límite es llamada a responder en atención de los artículos 1127 visto en armonía con el 1133 ambos del C. de Co.

---

<sup>25</sup> Cuaderno 02. PDF. 002, Pag. 1.

Aduce la aseguradora demandada que fue condenada al pago del 70.51% de la condena que el juzgado de primera instancia tasó en la suma de \$54.511.340, esto es, \$38.435.945, desconociendo que el límite asegurado de la póliza es de \$27.690.000, suma que además debe ser rebajada por efecto del deducible.

Del anterior reparo se colige que la inconformidad de la aseguradora radica en el hecho de que, para efectos de cuantificar la condena, el *a quo* tuvo en cuenta el valor del salario mínimo para el momento de la emisión de la sentencia, esto es, año 2017, y no para la anualidad de la expedición de la póliza de seguros, la cual data del año 2008.

En efecto, en la carátula de la póliza se fijó la indemnización en salarios mínimos, sin que exista aclaración alguna sobre si el valor de este debe ser tenido en cuenta al momento de la suscripción del contrato, de la ocurrencia del siniestro o de la condena.

El artículo 184.2 literales a. y c. del Estatuto Financiero señalan:

*"Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias: a. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, al presente estatuto y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva"*

*b. Los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza".*

De acuerdo a lo sostenido por la Corte Suprema de Justicia, en la carátula debe incluirse la información del artículo 1047 del Código de Comercio; que incluye la suma asegurada. Concretamente en la Circular Básica Jurídica de la Superfinanciera CE 029 de 2014, en su título IV, PARTE II, numeral 1.2.1.1 y s.s, se indica que en la Carátula de la póliza deben consignarse las condiciones particulares previstas en los artículos 1047 y 1068 del C. de Comercio, y a partir de la primera página de la póliza deben registrarse los amparos y exclusiones.

Así, el problema jurídico entonces se circunscribe en determinar que sucede si en la póliza no se indica de manera expresa que el valor en salarios mínimos será el vigente al momento del siniestro.

Frente a este tema, tiene por sentando la Sala lo siguiente<sup>26</sup>:

*“...La compañía aseguradora rebate que se le haya condenado a pagar el valor asegurado con los salarios mínimos vigentes para el momento del pago, que no con los de la fecha del siniestro. A juicio de este Tribunal la posición del apelante, a pesar de no hallarse expresamente prevista en el contrato de seguro, podría deducirse de sus condiciones generales, que prescriben*

#### «CONDICIONES GENERALES

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A., QUE EN ADELANTE SE DENOMINARÁ “SEGUROS MUNDIAL”, OTORGA POR LA PRESENTE PÓLIZA EN CONSIDERACIÓN A LAS DECLARACIONES QUE EL TOMADOR/ASEGURADO HAN HECHO EN LA SOLICITUD DE SEGURO Y QUE COMO TAL, FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO, LOS AMPAROS INDICADOS EN LA CARATULA DE LA PÓLIZA BAJO LAS CONDICIONES GENERALES ESPECIFICADAS A CONTINUACIÓN:

#### 1. AMPAROS

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y DE ACUERDO CON LOS AMPAROS CONTRATADOS, SEGUROS MUNDIAL CUBRE DURANTE LA VIGENCIA DE LA MISMA, LOS SIGUIENTES AMPAROS DEFINIDOS EN LA CONDICIÓN TERCERA.

##### 1.1. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

##### 1.2. AMPARO PATRIMONIAL

##### 1.3. ASISTENCIA JURÍDICA

(...)

#### 3.1. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

SEGUROS MUNDIAL CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES Y EXTRAPATRIMONIALES, CAUSADOS A TERCEROS DEBIDAMENTE ACREDITADOS Y DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE DE ACUERDO CON LA LEY INCURRA EL ASEGURADO AL CONDUCIR EL VEHÍCULO DESCRITO EN LA PÓLIZA O CUALQUIER OTRA PERSONA QUE CONDUZCA DICHO VEHÍCULO CON SU AUTORIZACIÓN, PROVENIENTE DE UN ACCIDENTE DE TRÁNSITO O SERIE DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO RESULTADO DE UN SÓLO ACONTECIMIENTO Y OCASIONADO POR EL VEHÍCULO ASEGURADO, O CUANDO EL VEHÍCULO ASEGURADO SE DESPLACE SIN CONDUCTOR DEL

<sup>26</sup> Sentencia 2º Instancia del 13 de julio de 2023, proceso 05001 31 03 013 2021 00245 01. MP. PIEDAD CECILIA VELEZ GAVIRIA.



LUGAR DONDE HA SIDO ESTACIONADO CAUSANDO UN ACCIDENTE O SERIE DE ACCIDENTES RESULTADO DE ESE HECHO.

EL VALOR ASEGURADO, SEÑALADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA, REPRESENTA EL LÍMITE MÁXIMO DE LA INDEMNIZACIÓN A PAGAR POR DAÑOS A BIENES DE TERCEROS Y/O MUERTE O LESIONES A TERCERAS PERSONAS, INCLUIDOS LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES CON SUJECCIÓN AL DEDUCIBLE PACTADO EN LA CARÁTULA DE LA POLIZA

EN TODO CASO LA INDEMNIZACIÓN ESTÁ SUJETA HASTA POR EL VALOR CONTRATADO PARA EL AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL, MENOS EL PORCENTAJE DEL DEDUCIBLE ESTABLECIDO» (negrita extra-texto, pdf.17 p.11).

Aunque si en gracia de discusión se considerase lo contrario, habría que advertir que de variada índole han sido las posturas que la doctrina y la jurisprudencia especializada han asumido cuando la suma asegurada es establecida en salarios mínimos; algunos por ejemplo señalan que debe pagarse con el valor del salario de la época de la ocurrencia del siniestro, otros en cambio argumentan que, en virtud del principio de equidad, la aseguradora debe sufragarlos conforme al valor que tengan al momento del pago efectivo; en torno a esta discusión, que la más de las veces pasa desapercibida, el tema contiene un trasfondo técnico-económico que ni las partes de la relación aseguraticia, salvo pacto expreso, ni el operador jurídico, pueden desatender.

Establece el artículo 1045 del Código de Comercio que la prima constituye el tercer elemento esencial del contrato de seguro, la cual se entiende como la contraprestación a cargo del tomador y a favor de la aseguradora, por el hecho de asumir los riesgos trasladados por aquel, cuyo defecto inclusive hace que el seguro no produzca efecto alguno.

De manera que el contrato de seguro no puede concebirse técnica y económicamente sin los aportes de la comunidad asegurada -prima-, cuya acumulación de hecho es la que le permite al asegurador el pago de las prestaciones cuando se presenta el riesgo asegurado -art. 1054 ejusdem-, de ahí que el 1047 indique que la póliza debe expresar, además de las condiciones generales del contrato «la prima o el modo de calcularla y la forma de su pago», que el asegurador devengará definitivamente la parte de la prima proporcional al tiempo corrido del riesgo y que en caso de siniestro total, indemnizable a la luz del contrato, «la prima se entenderá totalmente devengada por el asegurador» -art. 1070 ídem-, y que el pago fraccionado de la misma «no afecta la unidad del contrato de seguro, ni la de los distintos amparos individuales que acceden a él» -art. 1069 íbidem-.

Todo lo anterior, sin dejar de anotar que las reservas técnicas, que por ley destinan las compañías de seguro para respaldar las obligaciones que han contraído con sus asegurados, se calculan, muchas de ellas, en función del valor de la prima -reserva de la prima no devengada-, y otras en cambio, en razón de la suma asegurada o el valor del siniestro -reserva de siniestro avisado-.

La prima tiene un papel cardinal en materia jurídica, porque de hecho constituye un elemento esencial del contrato, desde el punto de vista técnico se trata de un proceso actuarial complejo, donde su cuantía no

depende del capricho del asegurador, sino que responde a un intrincado cálculo basado medularmente en la medida del riesgo -frecuencia y severidad-. Sobre el particular, autorizado doctrinante, dijo:

«la prima pura es el valor matemático del riesgo asegurado que, calculada sobre un conjunto numeroso de intereses del mismo género vinculado a determinada cartera, debe suponerse suficiente para cubrir los siniestros. Por lo cual debe tomar en cuenta la probabilidad de estos y su magnitud estimada. Más la prima pura no basta. La operación económica del seguro reclama, además del fondo adecuado para atender a las eventuales necesidades de los asegurados. Otros ingredientes que permitan preservar la integridad financiera de la organización, a saber: la promoción, la colocación, la administración, la tributación indirecta, todas las cuales generan erogaciones más o menos cuantiosas al margen de las prestaciones aseguradas, que necesariamente deben ser absorbidas por la comunidad de los usuarios del seguro. De ahí el recargo que, sobre la prima pura, debe calcularse cautelosamente y que, integrado a ella, da origen a la prima comercial que es la que cuenta, finalmente, como elemento esencial del contrato».<sup>27</sup>

De manera que si el valor de la prima se calcula al momento mismo de suscribirse el contrato de seguro, y aquella, como se advirtió, tiene una correspondencia directa e inescindible, al menos la prima pura, con el cálculo que sobre el riesgo amparado asumió el asegurador, aflora natural, y apenas lógico, que la suma asegurada, en este caso establecida en salarios mínimos, corresponde a los vigentes para el momento de la ocurrencia del siniestro. Y no puede ser de otra manera, porque una interpretación distinta evidentemente fractura la relación técnico-económica que existe entre la prima y el riesgo asegurado, amén de embestir el equilibrio contractual, de suyo pregonable a toda clase de contratos.

Tampoco puede sostenerse que por el envilecimiento del dinero, producido por el simple devenir del tiempo -fenómeno económico, que no jurídico-, implique que la aseguradora deba asumir el pago de la indemnización con el valor del salario mínimo vigente al momento del pago, porque otro fue el remedio que el legislador ex profeso estableció para sortear esa situación; en efecto, el artículo 1080 ibídem señala la oportunidad para el pago de la indemnización, indicando que «el asegurador estará obligado a efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aún extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador de acuerdo con el artículo 1077», y continúa la norma señalando que la desatención a este imperativo implica que «el asegurador reconocerá y pagará al asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al certificado como bancario corriente por la Superintendencia Bancaria aumentado en la mitad». (Subrayamos ahora)

Puestas en este orden las cosas, salta de bulto el error denunciado por la compañía aseguradora, pues la juzgadora de instancia, desconociendo la relación técnico-económica que existe entre el valor de la prima y el límite de la responsabilidad a cargo del asegurador, estableció, que los salarios como suma asegurada, debían ser pagados conforme al valor que tengan al momento del pago.

*De suerte que se modificará en este punto la providencia, para en su lugar indicar que el pago de la indemnización que directamente debe asumir la aseguradora, por la ocurrencia del siniestro, corresponde al valor del salario vigente para el año 2019."*

Es decir que la sala expresamente reconoce la necesidad cierta de que esos montos que se pactan en la póliza como límite asegurable deben ser objeto de actualización para el momento del pago, como no puede ser de otra manera si tenemos claro que la finalidad del contrato de seguro es que el asegurador mantenga al asegurado indemne de los daños de cualquier tipo que cause al beneficiario de éste, esto es evitar la mengua en su patrimonio, sin embargo con la fórmula que avizó en su momento para ello no se lograría tal cosa porque para efectos de la actualización de este monto, dijo la sala que el legislador *ex profeso* había previsto la circunstancia fáctica del artículo 1080 del C. de Comercio, norma que remite al 1077 *Ibíd.*, en la medida que presentada la reclamación a la aseguradora, y acreditado el siniestro y el monto de los perjuicios, si no se atendían, ésta debería pagar intereses moratorios a la tasa máxima legal, a partir del mes siguiente; sin embargo no se tuvo en cuenta para tal conclusión, que según lo ya definido por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria para ese momento y hasta ahora, esos intereses, en asuntos de responsabilidad patrimonial como la que acá se analiza, sólo se pueden causar a partir de la sentencia que determine la obligación indemnizatoria y el monto de los perjuicios, aún en la segunda instancia.<sup>27</sup> lo que entonces seguiría dejando en el limbo la pretendida actualización en total detrimento no solo del asegurado que cuando contrató la póliza lo hizo con la intención de que ese riesgo, en caso de concretarse, fuera asumido por aquella y así proteger su patrimonio, sino además de la víctima beneficiaria que vería ostensiblemente reducida la posibilidad de una reparación integral a la cual tiene derecho. Pero no solo eso, implica también el rompimiento del equilibrio económico contractual, que debe examinarse de manera recíproca, y no solo en la perspectiva de la aseguradora.

---

<sup>27</sup> H. Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 26 de mayo de 2021. M.P. Álvaro Fernando García Restrepo. Precedente frente al cual el ponente tiene serios reparos pero que no es del caso plantearlos ahora con la ilusión que prontamente el Alto Tribunal reevalúe tal postura.

Es que incluso, supeditar la referida actualización a la presentación o no de la reclamación, generaría dificultades prácticas en la medida que, adrede, el asegurado o el beneficiario no presentara la reclamación en términos razonables, o que la misma aseguradora decidiera, como política recurrente, no pagar sino y solo sí, hasta cuando un juez se lo imponga, no importa cuánto se demore, pues mientras más, mejor. Por lo que, ante tal panorama, y estado actual de la jurisprudencia, lo consecuente es acudir a un elemento objetivo que atienda a criterios de equidad como lo es la indexación.

Para nadie es desconocido el envilecimiento del dinero, y mucho más en economías inflacionarias como la nuestra; por supuesto que no es lo mismo pagar una suma específica en un momento determinado que años después. Ahora, si la indexación se entiende como el procedimiento por medio del cual se mantiene constante en el tiempo el valor de compra en toda transacción, o simplemente se mantiene el poder adquisitivo de la moneda, no puede verse entonces como sanción indemnizatoria que dependa de una conducta atribuible a la aseguradora, NO!, se trata simplemente de actualizar la cifra de un mismo valor, ese que se obligó a pagar.

Así las cosas, en el presente asunto los salarios mínimos en los cuales se estableció el monto asegurable para la vigencia de la póliza se indexará a la fecha de esta sentencia, y hasta ese límite es que la aseguradora deberá asumir la indemnización fijada en la sentencia, con los deducibles y conforme a la distribución antes especificada, lo cual entonces, en manera alguna puede calificarse como superación del límite asegurable tal cual se pregona en la impugnación, más allá que en ese aspecto se deba modificar la sentencia objeto de reparo.

En consecuencia, la aseguradora deberá reconocer el valor de la indemnización dentro del límite asegurado, esto es, \$27.680.000, que

corresponden a 60SMLMV para el año 2009, anualidad en la cual ocurrió el siniestro. Valor que actualizado quedará de la siguiente manera:

$$RA = VH \times \frac{IPC_{FINAL}}{IPC_{INICIAL}}$$

$$RA = 27.690.000 \times \frac{138,98}{71,35}$$

$$Ra = \$53.936.316$$

Este será entonces el valor de la cobertura, al que se le deberá aplicar el deducible del 10%, conforme se pactó en contrato de seguro.

Ahora, como la aseguradora se obligó a pagar hasta 60 smlmv, y de ese monto solo el 40% eran para cubrir los perjuicios morales, entonces pagará solo 24 smlmv, menos el deducible del 10%; y de los perjuicios patrimoniales cubrirá hasta lo que equivalga a los otros 36 salarios mínimos restantes, a los que igualmente aplicará la reducción del deducible pactado como antes se anotó, reparos en los cuales asistía razón al impugnante.

### 2.3. Del lucro cesante.

Manteniéndose las razones de la declaratoria de responsabilidad de los condenados, corresponde analizar los reproches invocados por el demandante, relativo a la tasación de los perjuicios materiales en modalidad de lucro cesante, al considerar que los testigos aportados al proceso, fueron acordes en señalar sobre el valor de sus ingresos, y respecto de AXA SEGUROS COLPATRIA S.A., que advierte que este perjuicio no fue expresamente pactado en la póliza.

Como primera medida debe exponerse que, la aseguradora debe hacerse cargo de la indemnización correspondiente por los perjuicios patrimoniales que causó la asegurada, concretamente en lo

correspondiente al lucro cesante, ya que, por tratarse de un seguro de responsabilidad, según el artículo 1127 del C. de Comercio, no es necesario que exista acuerdo expreso frente a su cobertura, pues se entiende que este ítem se encuentra incluido. Pero es que además el artículo 1088 Ibídem - principio indemnizatorio en seguros de daños-, que solo se refiere al lucro cesante del asegurado, no al de la víctima, pues al de esta se refiere el art. 1127 de la misma codificación.

Sobre este tema, atinente a las alegaciones de la misma naturaleza por una compañía aseguradora, la Corte Suprema de Justicia expuso<sup>28</sup>:

*"(...) En lo atinente a la cobertura por lucro cesante, es cierto que la póliza no trae 'acuerdo expreso' que lo involucre como materia del negocio aseguraticio, condición que a voces del artículo 1088 del Código Comercio resultaría inexorable para que el seguro lo comprendiera; más, aunque tal cosa sucede, lo cierto es que en tratándose de este tipo especial de seguro, vale decir, de responsabilidad civil, regulado específicamente por los artículos 1127 y siguientes del Código de Comercio, no se hace menester dicho acuerdo, **pues al estatuir la norma que la indemnización a cargo del asegurado envuelve 'los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado con motivo de determinada responsabilidad en que incurra', no es dable al intérprete entrar en distinciones como la que plantea la llamada en garantía, tanto menos cuando ello contraviene los dictados hermenéuticos que orientan la materia** (...) "<sup>29</sup> (se resalta).*

En igual sentido, la misma Sala recientemente señaló:

*"(...) Ahora bien, en el caso bajo estudio, al revisar la póliza objeto del debate se encuentra, que la Compañía Suramericana de Seguros S.A., expidió la póliza No. 0987160, en la que figura como asegurada la sociedad concentrados Cresta Roja S.A. y se amparó la responsabilidad civil extracontractual, entre otras cosas, la «muerte o lesiones a personas», por un límite de \$500.000.000, consignándose así mismo, en las condiciones generales únicamente las exclusiones que se tendrían en cuenta.*

*"De lo que se desprende, contrario a lo asumido por el A-quem, que de la expresión general de la cobertura, se puede colegir que se amparó la*

<sup>28</sup> Sentencia SC2107-2018. MP. Luis Armando Tolosa Villabona.

<sup>29</sup> CSJ SC 19 de diciembre de 2006, rad. 2002-00109-01.

*totalidad de la indemnización que debiera pagar la asegurada Concentrados Cresta Roja S.A., la cual cubre todos los daños que tuviere que **reparar la sociedad**, esto es, **tanto los perjuicios patrimoniales como los extrapatrimoniales, es decir los daños en el fuero interno de la persona como los morales y los de la vida en relación** (...)”<sup>30</sup> (negritas fuera de texto).*

Así, quedando desvirtuados los argumentos del apoderado de AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., nos referiremos al reproche planteado por el demandante, que gira en torno al hecho de que la liquidación de dichos perjuicios se fijó con base al salario mínimo mensual legal vigente y no sobre la suma que anunció devengar para la época del accidente.

En efecto, se allegó con la demanda documento<sup>31</sup> expedido por Comercializadora “Lescrima” donde se certifica que Edwin Andrés Molina Holguín laboraba para dicha entidad mediante un contrato de trabajo a término indefinido, con un salario de \$1.250.000 mensuales; del mismo modo, se recepcionaron los testimonios<sup>32</sup> de Edison Darío Bedoya Soto, Oscar Andrés Ochoa López, Santiago Osorio Guevara, Marco Fidel Holguín Moreno y Jorge Iván González Ruiz. Estos elementos materiales probatorios sin duda denotan que el demandante laboraba y estaba ejerciendo actividades económicas relacionadas con el manejo de sistemas, cafés Internet y venta de minutos, sin embargo, de tales probanzas no se extrae de manera fehaciente que devengaba un salario fijo y a cuanto ascendía, pues todos los testigos se limitaron a señalar sumas distintas, pero sin tener certeza de ello, es decir, no resulta una prueba idónea que acredite de manera clara y concreta sus ingresos.

Y no se puede concluir que percibía el salario aducido, toda vez que el mismo demandante en el interrogatorio de parte reconoció que a pesar de su vinculación con la “Comercializadora Lescrima”, no se pagaba seguridad social por ningún rubro, por el contrario, se encontraba afiliado en salud al SISBÉN, tal y como lo advierte su madre Luz Marina Holguín en su

<sup>30</sup> CSJ STC 12625-2015, reiterada en sentencia SC 20950-2017.

<sup>31</sup> Cuaderno 001Principal, PDF, 003Demadna, Pag. 68

<sup>32</sup> Cuaderno 003, pdf, 002Pruebas, Pag. 81 y s.s.

declaración<sup>33</sup>. Es más, pese a la citación que se hiciera a la persona encargada del departamento de recursos humanos de la aludida compañía, a efectos de ratificar la certificación expedida el siete de enero de 2009, no hizo presencia al juzgado, al igual que tampoco se aportó la documentación pertinente, que en su calidad de comerciante debía manejar, que conllevar a verificar la cuantía de dinero que recibía del negocio de café internet, donde prestaba varios servicios de telefonía.

Todas estas circunstancias e insuficiencias probatorias, denotan una falta de certeza en los presuntos ingresos advertidos por el promotor de la acción en el libelo.

Ahora, esta carencia demostrativa de los ingresos devengados, implicaba el reconocimiento por concepto de lucro cesante, como lo hizo en este caso el juzgador: *“acoger como referente para dicha tasación el salario mínimo legal, a cuenta de “que nada descabellado es afirmar que quien trabaja devenga por lo menos el salario mínimo legal”*<sup>34</sup>.

Bajo estas condiciones, acorde con la jurisprudencia traída a colación y al confrontarla con la situación fáctica y el material probatorio obrante en el expediente, sin mayores disertaciones, la Sala encuentra, que la estimación del lucro cesante resulta razonable, pues la víctima EDWIN ANDRÉS MOLINA HOLGUÍN sufrió secuelas de carácter permanente, por las cuales se le expidió incapacidad definitiva por 50 días<sup>35</sup>. Infundada resulta entonces censura al respecto.

Se actualizará eso sí, la liquidación del lucro cesante consolidado al momento de la emisión de la presente providencia, al igual que el lucro cesante futuro, de acuerdo a la modificación de la condena, que pasará del 50% al 70% así:

#### **Lucro cesante consolidado actualizado:**

---

<sup>33</sup> Cuaderno 003, pdf. 002Pruebas, Pag. 88 y s.s.

<sup>34</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, 19 de diciembre de 2006, Ref.: Expediente No. 2002-00109-01

<sup>35</sup> Cuaderno 001Principal. PDF. 003Demadna. Pag. 43.



**Sn** es el valor acumulado de la renta periódica de un peso que se paga **n** veces a una tasa de interés **i** por período.

De otro lado, la fórmula matemática para **Sn** es:

$$Sn = \frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

Siendo:

**i** = la tasa interés por período.

**n** = el número de meses a liquidar.

Reemplazando la fórmula:

**LCM (Lucro Cesante Mensual)** = \$152.479 (23.85%) del salario mínimo para el año 2007, que equivalía a \$496.900, debidamente actualizado.

$$Sn = \frac{(1 + 0.004867)^{181,13} - 1}{0.004867}$$

$$Sn = 289,604497$$

$$VA = \$152.479 \times 289,604497$$

$$VA = \$44.158.604$$

El lucro cesante consolidado sería el equivalente a la suma de \$44.158.604, menos el 30%, por la incidencia causal del actor en la realización de los hechos, el monto ascendería a **\$30.911.022**.

#### **Lucro cesante futuro actualizado:**

La fórmula a aplicar por lucro cesante futuro es la siguiente:

$$\frac{(1 + i)^n - 1}{i}$$

$$i \times (1+i)^n$$

**i** = tasa de interés por período.

**n** = número de meses a liquidar.

**LCM** = \$152.479

$$Ra = \frac{(1 + 0.004867)^{460.87} - 1}{0.004867 \times (1 + 0.004867)^{460.87}}$$

**Ra** = 183,539838

**VA** = \$152.479 x 183,539838

**VA** = **\$27.985.970**

El lucro cesante futuro sería el equivalente a la suma de \$27.985.970, menos el 30%, por la incidencia causal del actor en la realización de los hechos, el monto ascendería a **\$19.590.179**.

En suma, la condena por perjuicios patrimonial ascendería a \$50.501.201, de los cuales la compañía aseguradora deberá reembolsar La suma de **\$32.361.840, menos el deducible del 10%**.

## **2.4. De los perjuicios morales.**

Sobre este punto, se tiene que el Juez A-quo determinó que al demandante debía reconocérsele la suma de 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes debido a la reducción del 50% en razón al aporte suyo en los hechos objeto del proceso. Al ejercerse la contradicción, de acuerdo a lo expuesto por el apoderado del demandante y atrás sintetizado, se muestra inconforme al considerar que la cuantía es muy baja, siendo un joven de 22 años que quedó con muchas limitaciones, el dolor que sufrió con el accidente y después de éste.

En tratándose del perjuicio moral, conforme lo ha establecido la jurisprudencia, el asunto queda sometido al *arbitrium judicis* del funcionario

judicial sin que exista una prueba específica para determinar su cuantía, o sin que sea determinable por un experto en la materia. De cara al tópico, la H. Corte Suprema de Justicia ha señalado que<sup>36</sup> *"...13.1. La valoración del daño moral subjetivo, por su carácter inmaterial o extra patrimonial, se ha confiado al discreto arbitrio de los falladores judiciales. Esto, por sí, lejos de autorizar interpretaciones antojadizas, les impone el deber de actuar con prudencia, valiéndose de los elementos de convicción que obren en el plenario y atendiendo la naturaleza del derecho afectado y la magnitud del daño. Esta clase de daño, se ha dicho, "incide en la órbita de los afectos, en el mundo de los sentimientos más íntimos, pues consiste en el pesar, en la aflicción que padece la víctima por el comportamiento doloso o culposo de otro sujeto, por cuanto sus efectos solamente se producen en la entraña o en el alma de quien lo padece, al margen de los resultados que puedan generarse en su mundo exterior, pues en éstos consistirían los perjuicios morales objetivados..."*

Y también que: *"...13.3. La reparación de be procurar una relativa satisfacción para no dejar incólume o impune la agresión; sin que represente una fuente de lucro injustificado que acabe desvirtuando la función asignada por la ley. Es posible establecer su quantum, sostuvo recientemente la Sala, «en el marco fáctico de circunstancias, condiciones de modo, tiempo y lugar de los hechos, situación o posición de la víctima y de los perjudicados, intensidad de la lesión a los sentimientos, dolor, aflicción o pesadumbre y demás factores incidentes conforme al arbitrio judicial ponderado del fallador..."*<sup>37</sup>

Como puede verse, además del *arbitrium judicis* con que goza el fallador de la causa, en el ámbito de su autonomía funcional para el efecto, pues que justamente por su naturaleza inmaterial, meramente subjetiva, no es posible pretender una regla única de cuantificación del mismo, todo dependerá de las circunstancias particulares de cada caso y de cada individuo en tanto seres humanos únicos tenemos formas disímiles de enfrentar el dolor y las adversidades de la vida. Justo por eso, en estricto

---

<sup>36</sup> Sentencia SC4703-2021. Mp. Luis Armando Tolosa Villabona

<sup>37</sup> Ibidem

sentido, no se trata de un daño que pueda repararse monetariamente, sino que lo que se busca es compensarlo así en parte, pues que, incluso, es probable que tales aflicciones sigan persistiendo. En el presente asunto se advierte que la condena por tal tópico se fijó dentro de los parámetros jurisprudenciales aludidos, teniendo en cuenta la situación fáctica anotada en la demanda y la prueba recaudada que dan cuenta del sufrimiento del demandante el cual emana de manera natural por el hecho de haber sido víctima directa del accidente de tránsito, pero que fue necesario reducir en la proporción de su participación causal en el hecho dañino. Por tanto, no prospera el reparo señalado. Sin embargo, se modificará la decisión, pues la reducción equivaldrá solo al 30%., arrojando entonces el total de 28 smlmv.

De estos salarios mínimos la aseguradora deberá sufragar \$21.574.526 menos el 10% del deducible, tal y como antes quedó dicho.

## **2.5. Del daño a la vida en relación.**

A través del último motivo de inconformidad, el demandante manifiesta que debe valorarse que ya no puede hacer las mismas actividades, trabajos y actividades lúdicas, como profesional e incluso como miembro de su familia, pues tal y como lo indicaron los deponentes, él ya no es el mismo que era antes del accidente, ya no juega, ya no ríe ni disfruta igual.

Sobre el particular, se ha dicho del daño a la vida de relación, que a diferencia del perjuicio moral, es un concepto jurídico que se refiere al sufrimiento que experimenta una persona cuando pierde o disminuye su capacidad de realizar actividades que le dan sentido y placer a su vida, como el deporte, el ocio, la cultura o las relaciones sociales y afectivas.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha precisado que el daño no patrimonial se puede presentar de varias maneras: **i)** mediante la lesión a un sentimiento interior y por ende, subjetivo (daño moral); y **ii)** como privación objetiva de la facultad de realizar actividades cotidianas que

producen placer, tales como practicar deportes, escuchar música, asistir a espectáculos, viajar, leer, departir con los amigos o la familia, disfrutar el paisaje, tener relaciones íntimas, etc., (daño a la vida de relación)<sup>38</sup>.

De ahí que, como igualmente lo precisó esa misma Corporación, el daño a la vida de relación, también conocido o denominado perjuicio fisiológico, se trata de *“un perjuicio de naturaleza extrapatrimonial, distinto del perjuicio moral, pues tiene carácter especial y con una entidad jurídica propia, porque no se refiere propiamente al dolor físico y moral que experimentan las personas por desmedros producidos en su salud, o por lesión o ausencia de los seres queridos, sino a la afectación emocional que, como consecuencia del daño sufrido en el cuerpo o en la salud, o en otros bienes intangibles de la personalidad o derechos fundamentales, causados la víctima directa o a terceras personas allegadas a la misma, genera la pérdida de acciones que hacen más agradable la existencia de los seres humanos, como las actividades placenteras, lúdicas, recreativas, deportivas, entre otras”*<sup>39</sup>.

Y es que quien sufre un daño de esta naturaleza se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, como quiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales. Por lo mismo, recalca la Alta Corporación, la calidad de vida se ve reducida, al paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente<sup>40</sup>.

Visto lo anterior, debe decirse que el recurrente hace derivar tal reclamación en que ya no puede hacer las mismas actividades y trabajos que realizaba antes del accidente, es decir, se afectaron las acciones que cotidianamente efectuaba y con las que se sentía a gusto y feliz, de lo cual dan cuenta los testigos allegados al proceso. Lo cierto es que el señalamiento de 40 salarios mínimos legales mensuales vigentes, resulta apropiada y adecuada de acuerdo a las probanzas del proceso. Por lo que tampoco hay lugar a coger lo alegado en la impugnación. Ahora, ante la

---

<sup>38</sup> Sentencia de 13 de mayo de 2008, exp. n.º: 1997-9327-01

<sup>39</sup> SC22036-2017, M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo, 19 de diciembre de 2017

<sup>40</sup> Sentencia de 13 de mayo de 2008, exp. N.º: 1997-9327-01

rebaja, se repite, del 30% por la incidencia causal del actor en la realización de los hechos, este rubro ascenderá a 28SMLMV.

No obstante, las anteriores conclusiones, debe precisarse que la condena tanto por los daños morales como por la vida de relación debe leerse siempre en términos de salarios mínimos, equivalentes para el momento de la sentencia, y a partir de la ejecutoria de la misma se reconocerán intereses de mora.

### **3. Conclusión.**

Corolario de lo anterior, la sentencia de primera instancia será confirmada, con las modificaciones aludidas; sin lugar a condenar en costas, dado que el recurso fue favorable parcialmente para ambas partes apelantes.

### **III. DECISIÓN.**

Con fundamento en lo expuesto, **la Sala Cuarta de Decisión Civil del Tribunal Superior de Medellín**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad Constitucional y legal,

#### **FALLA:**

**PRIMERO: CONFIRMAR** la sentencia proferida el 31 de octubre de 2017 por el Juzgado Tercero Civil del Circuito de Envigado, dentro del proceso Declarativo – Verbal de Responsabilidad Civil Extracontractual promovido por EDWIN ANDRÉS MOLINA HOLGUÍN contra OMAR ANTONIO GARCÍA SALINAS y las sociedades TRANSPORTES ENVIGADO y AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. proceso en el cual se llamó en garantía a esta última.

**SEGUNDO: MODIFICAR** los ordinales quinto y sexto de la sentencia impugnada, en cuanto a las condenas por perjuicio moral y daño a la vida de relación, en el sentido de que ambas equivalen a 28 SMLMV, de los cuales la aseguradora AXA COLPATRIA SEGUROS S.A., deberá sufragar 24

SMLMV, que equivalen a **\$21.574.526**, y por perjuicios patrimoniales, sumando lucro cesante consolidado y futuro, según se motivó, la suma de **\$50.501.201**, de los cuales la aseguradora pagará **\$32.361.790**, previa deducción 10% pactado en la póliza en ambos casos. La diferencia la deberán asumir solidariamente los demandados. Por estos conceptos, deberán reconocerse intereses moratorios a partir de la ejecutoria de la presente sentencia hasta el momento del pago.

**TERCERO:** Sin lugar a **CONDENAR** en costas, dado que el recurso fue desfavorable para ambas partes recurrentes.

**CUARTO: NOTIFÍQUESE** esta providencia a los sujetos procesales por el medio más expedito y **DEVUÉLVASE** el expediente al Juzgado de origen.

*Proyecto discutido y aprobado en sala de la fecha*

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

Los Magistrados, (Firmados electrónicamente)

**BENJAMÍN DE J. YEPES PUERTA**

**JULIÁN VALENCIA CASTAÑO**

**(Con salvamento parcial de voto)**

**PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA**

Firmado Por:

**Benjamin De Jesus Yepes Puerta**  
**Magistrado**  
**Sala Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Julian Valencia Castaño**  
**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional**  
**Sala 010 Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

**Piedad Cecilia Velez Gaviria**  
**Magistrada**  
**Sala 002 Civil**  
**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**  
**Firma Con Salvamento Parcial De Voto**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **8333dd08144a36abdfd7238395254d1a1afad20ff921d596e145d69609255817**

Documento generado en 14/03/2024 04:58:08 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**